

Doctora  
**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO**  
Honorable Magistrada del Tribunal Administrativo del Valle  
Ciudad.

RADICACION:	76001-23-33-000-2023-00347-00
DEMANDANTE:	HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ASUNTO:	CONTESTACION DEMANDA

### **NOMBRE Y DOMICILIO DEL DEMANDADO**

HECTOR MARIO VALENCIA ARBELAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.690.200 de Cali, expedida en Cali (Valle), abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 71831 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial del Municipio de Santiago de Cali, según poder especial otorgado por la doctora MARIA DEL PILAR CANO STERLING, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.869.025 expedida en Cali, Valle del Cauca, en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago Cali, nombrada mediante Decreto No. 4112.010.20.0001 del 1º de enero de 2020 y acta de posesión 0007 del 1º de enero de 2020, debidamente facultada por el Doctor JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre, Valle del Cauca, en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y Representante Legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020, descorro el traslado para contestar la demanda de acuerdo con las siguientes consideraciones:

### **CONTESTACION OPORTUNA DE LA DEMANDA**

Los términos para contestar la demanda se contabilizan conforme lo dispone el Artículo 172 de la Ley 1437 y en el caso que nos ocupa, el auto admisorio de la demanda se notifica personalmente, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico que el Municipio de Santiago de Cali tiene dispuesto para dicha notificaciones, lo cual se realiza a partir del día ocho (8) de agosto de 2023, contabilizándose el término a partir del 9 de agosto de 2023.

Con el acuerdo de la rama judicial, los términos estuvieron suspendidos desde el 14 de septiembre hasta el 20 de septiembre de 2023 inclusive.

Ahora bien, conforme a los términos indicados en el artículo 199 de la Ley 1437 modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje al correo electrónico para surtir notificaciones y los términos empezaran a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

### **EL NOMBRE DEL DEMANDADO, SU DOMICILIO Y EL DE SU REPRESENTANTE O APODERADO**

El demandado es el Municipio de Cali, entidad territorial que está exenta de demostrar su existencia, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 166 de la ley 1437 de 2011, con plena capacidad legal para obrar en el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la misma ley, legalmente representada por el Doctor JORGE IVAN OSPINA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre Valle, en su condición de Alcalde de este Municipio. La representación judicial de la Entidad Territorial está a cargo de la doctora MARIA DEL PILAR CANO STERLING, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31869.025 expedida en Cali, en calidad de Directora, del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica, obrando en tal calidad, de conformidad con el Decreto de Delegación No. 4112.010.20.0001 de fecha enero 1° de 2020, y quien a su vez, le ha otorgado poder especial a este servidor, para que represente judicialmente al Municipio de Santiago de Cali, hoy Distrito Especial, en los términos del mandato conferido.

Para efectos procesales, nuestro domicilio es la Ciudad de Santiago de Cali - Centro Administrativo Municipal C.A.M - Torre Alcaldía de Cali, Piso 9, localizado en la Avenida 2 NORTE entre Calles 10 y 12 de esta ciudad, Celular del suscrito: 310-416-09-98, y mi dirección electrónica para notificaciones es:

**Dirección electrónica Municipio de Cali:**

Apoderado: **hector.valencia@cali.gov.co** / **hectorm\_63@hotmail.com**

Tel: 3104160998

**PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

1.- DECLARAR que, se configuró el fenómeno de la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, al proferirse la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia en el Proceso Verbal con Radicación 647 – 16, por fuera de los cinco (5) años, acorde a los Tratados Internacionales suscrito por Colombia, las jurisprudencias y lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

2.- Se declare la nulidad de la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16.

3.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16.

4.- Se declare la nulidad de la Resolución No.4137.010.21.2818 del 4 de octubre de 2022, que ejecuta la sanción disciplinaria, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Dra. Claudia Patricia Marroquín Cano.

5.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a favor de HUGUES OTHÓN OLIVELLA SAURITH, a título de restablecimiento de derecho: i) el reconocimiento y pago por concepto del tiempo que duró suspendido, desde el

uno (1) hasta el treinta (30) de noviembre de 2022, más las prestaciones sociales causadas y dejadas de pagar con su respectiva indexación.

6.- Condenar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en los daños materiales y morales, causados por los efectos producidos en sancionar al haber perdido la competencia, y los que, se ocasionen, por no poder aspirar a un encargo con efectos fiscales, mediante convocatoria interna que, realice la demandada, en los 12 meses siguientes de haberse ejecutado la sanción.

7.- Condenar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en el caso de no dar cumplimiento al fallo dentro del término establecido en el inciso 3 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, pague a favor de mi mandante los intereses moratorios conforme lo establece el artículo 192 ibídem; y, asimismo, se le reconozca demás emolumentos legales por este incumplimiento.

8.- Ordenar al Distrito de Santiago de Cali, DADII, Subdirección del Talento Humano, que notifique a las entidades pertinentes, la decisión conferida por este despacho, para que, se borren los antecedentes disciplinarios del servidor público Hugues Othón Olivella Saurith, que tengan efectos, con este proveído.

9.- Condenar en costas a la entidad, por haber proferido resoluciones de 1ª y 2ª instancia, cuando habían perdido la competencia para sancionar, por estar prescrita la acción disciplinaria.

## NUESTRO PRONUNCIAMIENTO

Con relación a las pretensiones antes mencionadas, me opongo a las mismas, toda vez que una vez verificadas en detalle las actuaciones y las diligencias disciplinarias surtidas por la Dirección de Control Disciplinario Interno del Municipio de Santiago de Cali y las del Señor Alcalde de Santiago de Cali, a través del expediente bajo el **Radicado No 647-16**, se observa que las mismas se ciñeron todas a la normatividad vigente y al tiempo no se observa en ninguna de ellas, que se presentaran vicios de carácter sustancial y/o procedimental que pudiesen invalidarlas y/o que conllevaran a declarar la nulidad de dichas actuaciones.

## RESUMEN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria, en contra del señor HUGUES OTHON OBIVELLA SAURITH, se circunscriben al incumplimiento del deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, referido a impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo el proceso de humedal No. 1944-549, (...), cuando procedió a archivar injustificadamente el expediente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016; y en tal sentido la fecha de ocurrencia de la falta disciplinaria data del 10 de agosto de 2016.

Luego, con relación a la falta antes mencionada y conforme a los hechos referidos en la convocatoria, la parte actora ha explicado que:

En fecha 10 de agosto de 2021, fue notificado del Auto No. 4124.010.9.13. 647.16. 1618 DEL 27 DE JULIO DE 2021, que dio APERTURA AL PROCEDIMIENTO VERBAL 647 — 16.

-. En ningún momento, el ad quo o ad quem, dentro del proceso disciplinario surtido en el Exp. 647— 16, logra demostrar que la acción disciplinaria deba extenderse por más de los cinco (5) años.

-. Refiere que transcurrieron más de cinco años para proferir y notificar el fallo de primera instancia, y que el de segunda instancia, fue posterior a seis (6) años de haberse cometido la presunta falta disciplinaria, y que aún pon la suspensión de los términos en actuaciones administrativas, debido a la pandemia, conforme a los Decretos expedidos por el alcalde de Cali, del 17 de marzo al 18 de agosto de 2020.

-. En ese orden de ideas, siendo que, el fallo de primera instancia del Proceso Verbal se notificó en estrado el 27 de abril de 2022, habían transcurrido, más de 2 meses y una semana de estar prescrita la acción disciplinaria, vislumbrándose a todas luces, la VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO., ya que, al configurarse la prescripción de la acción disciplinaria, la administración perdió la competencia para sancionar. Ni qué decir, del fallo que resolvió el recurso de apelación en segunda instancia, notificado el 18 de agosto de esta anualidad

-. Refiere que la Corte Constitucional, ha establecido que dentro de los cinco (5) años, debe notificarse incluso, la decisión de segunda instancia y debe quedar ejecutoriada.

-. Considera en tal caso el convocante que por las anteriores consideraciones solicitara con la acción que interponga de N y R del D, SENTENCIA ANTICIPADA, para que se declare la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA y que como consecuencia de ésta, se declare igualmente, la nulidad de los actos administrativos que se atacan, es decir, la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal, Radicación 647 — 16, la cual presenta múltiples yerros procesales previamente expuestos en los Alegatos de conclusión de primera y segunda instancia; e igualmente refiere que los mismos también fueron desatendidos en la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, notificada el 18 de agosto de 2022, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal.

## PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Consideramos respetuosamente que la controversia jurídica planteada en sede judicial, se contraería en determinar, si con las pruebas allegadas al plenario, se ha logrado establecer la acción u omisión de la administración distrital, con relación a los actos administrativos proferidos de carácter sancionatorio tanto en primera como en segunda instancia, y en consecuencia, si dichas actuaciones pueden dar lugar a ser declaradas nulas, en virtud del acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la acción frente a las faltas investigadas y objeto de la sanción.

Igual, si la Resolución No. 2818 de Octubre 4 de 2022, a través del cual se ejecuta la sanción disciplinaria y que fuera proferido por la Directora de Desarrollo e innovación Institucional del Distrito de Santiago de Cali, debe declararse nulo?.

## ARGUMENTOS FRENTE A LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES

En efecto, la parte actora para establecer los presupuestos de hecho y de derecho y sobre las causas que podrían haber dado lugar a la extralimitación de la entidad territorial tanto en primera como en segunda instancia, considera que es por la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 29 constitucional (debido proceso) y otras disposiciones de la ley 734 de 2002, etc, al no declararse la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, que se encontraba configurada al momento de proferirse los fallos de 1ª y 2ª instancia # 4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022 y # 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, respectivamente, al emitirse por fuera de los cinco (5) años, contrariando así lo dispuesto en los Tratados Internacionales suscritos por Colombia, la jurisprudencia de las altas cortes y conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

Sobre el particular consideramos que no resulta factible acceder a las pretensiones formuladas. Como tampoco a las de orden económico, respecto del mes de salario dejado de cancelar en noviembre de 2022, salarios y prestaciones e indexaciones, así como por los daños materiales y morales, antecedentes disciplinarios, costas etc.

Lo anterior porque se considera que en la decisión de segunda instancia, se ha argumentado suficientemente sobre todos los hechos exceptivos e impugnaciones formuladas por la parte actora, los cuales pueden resumirse así:

Sobre la Caducidad y prescripción de la Acción Disciplinaria se explicó que:

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción

Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:

"La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique".

Conclusión:

En el caso materia de estudio no ha ocurrido el fenómeno de la caducidad disciplinaria por cuanto el operador disciplinario profirió el auto No.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

4124.010.9.13.647-16-1618 del 27 de julio de 2021; es decir antes que transcurrieran los cinco (5) años de que trata la norma, contabilizados desde Agosto 10 de 2016, incluso sin considerar los términos de suspensión de los procesos disciplinarios por razones de la emergencia sanitaria.

#### Prescripción de la acción disciplinaria

Regla general: la acción disciplinaria prescribirá en cinco años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria, es decir a partir de julio 27 de 2021.

Interrupción: con la expedición y notificación de los fallos de primera y de segunda instancia según sea el caso: Fallo de primera instancia: Abril 27 de 2022, notificado en estrado en la misma fecha.

Conclusión: En el presente caso no ha ocurrido el fenómeno de la prescripción, considerando que la investigación inicio el 27 de julio de 2021, y la notificación del fallo de primera instancia, que interrumpe los términos de la prescripción, se efectuó antes de transcurrir los cinco (5) años que ordena la ley (abril 27 de 2022).

Ahora bien respecto de los cargos formulados quedo establecido en la decisión para el primer cargo, que el disciplinado:

en el ejercicio de las funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA SEGUNDA CATEGORÍA, dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, incumplió el deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, de impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo el proceso de humedad No.1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, relacionado con la humedad que se presentaba en el inmueble de la Diagonal 28C No. 34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, cuando procedió a archivar injustificadamente el expediente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016 en el que declaró la perención atribuyendo infundadamente el abandono del trámite policivo, situación que implicó que la problemática de humedad que constituía una contravención común, quedó sin decisión de fondo y por ende sin solución.

El servidor público en este caso no solo se alejó de la ritualidad prevista en el Decreto Municipal 1944 de 1997, sino que también se sustrajo al deber funcional que tenía según el Decreto Municipal No. 411.20.00062 del 23 de febrero de 2007, para resolver de fondo y en forma definitiva, la problemática de humedad que afectaba a dicho inmueble y por tanto a sus ocupantes.

Y respecto del segundo cargo formulado se estableció que



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Igualmente se considera definitivamente que el servidor público investigado incumplió el deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No.1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, relacionado con la humedad que se presentaba en el inmueble de la Diagonal 28C No.34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, y que su comportamiento implicó un abuso indebido del cargo o función, toda vez que la decisión de archivo con la que concluyó el proceso, el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, carecía del sustento fáctico que demostrara que efectivamente el quejoso no había cumplido o realizado alguna carga procesal, o que la falta de impulso o trámite del proceso le era atribuible a su abandono.

Era deber del servidor público actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad, dándole impulso al procedimiento policivo para resolverlo de manera definitiva o de fondo, como además le habían indicado al querellante que se haría.

Y respecto de los cargos formulados y que resultaron probados se dijo en la decisión que:

Respecto del cargo que finalmente resulta probado y en el que se consideró que quedó subsumido el segundo, no existe para el Despacho duda o discusión alguna para ratificar dicha calificación en forma definitiva, acorde a los criterios que establece el artículo 43 de la ley 734 de 2002, como son: (1) el grado de culpabilidad, en atención a la naturaleza del cargo que es autoridad de policía, el perfil que requiere su ejercicio y la experiencia, (2) la naturaleza esencial del servicio, como es la competencia que tenía el servidor público como autoridad de policía, cuyas actuaciones son regladas y facultades por Constitución y por Ley, (4) la jerarquía y mando del servidor público, precisamente por ser autoridad de policía con competencia para preservar y mantener el orden público que resulta de la eliminación de las perturbaciones a la seguridad, tranquilidad, moralidad, salubridad y ornato público, en lo que prevalece el interés general sobre el particular, y como consecuencia de ello (5) la trascendencia social de los comportamientos, ya que se espera que la autoridad de policía ejerza sus funciones, facultades o atribuciones con apego a las normas de procedimiento, que son de orden público, y por tanto, de obligatorio y estricto cumplimiento.

Finalmente en cuanto a la forma de responsabilidad se estableció que:

No se puede desconocer que el servidor público ostentaba el perfil profesional de abogado, lo que permite asumir que tenía el conocimiento suficiente de saber cómo actuar y resolver un asunto que era de su competencia, y la ritualidad a la que debía atemperarse, y sin embargo no lo hizo, a pesar que pudo haber atendido o asumido esa competencia orientado inicialmente por la norma, y por la decisión del juez de tutela de primera instancia, que le obligó a dejar sin efecto la decisión, reprogramar la inspección ocular, sin concluir el procedimiento, solo por el hecho de que fue revocado el fallo de primera instancia en el trámite de la acción de tutela.

Finalmente el servidor público dejó sin resolver el asunto a fecha 13 de febrero de 2017, cuando expidió el auto de obediencia y cumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia, dejando sin efectos los autos del 12 de diciembre de 2016 y del 31 de enero de 2017, sin razón o fundamento alguno.

En consecuencia, el comportamiento que determina el cargo probado, se califica definitivamente como FALTA GRAVE cometida a título de DOLO, sin haberse probado o establecido la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

Ya para la dosificación de la sanción disciplinaria como tal se estableció que:



CO - SC - CER852615



centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Debe tenerse en cuenta que las dos faltas que finalmente resultan probadas y no desvirtuadas, fueron calificadas definitivamente como a FALTAS GRAVES cometidas a título de DOLO, en razón de lo cual debe tenerse en cuenta que a ellas corresponde la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 numeral 2 de la ley 734 de 2002, donde la suspensión implica la separación en el ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquél por el término señalado en el fallo (Artículo 45 definición de las sanciones).

**De las pruebas arrojadas al Proceso destacamos las siguientes:**

- 1.- Anexo, copia adjunta, de la Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16.
- 2.- Copia adjunta de la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16.
- 3.- Copia adjunta de la Resolución No.4137.010.21.2818 del 4 de octubre de 2022, que ejecuta la sanción disciplinaria, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Dra. Claudia Patricia Marroquín Cano.
- 4.- Copia de los alegatos presentados en primera instancia.
- 5.- Copia de los alegatos aportados en segunda instancia.
- 6.- De oficio. Solicito respetuosamente, se oficie a los accionados para que, alleguen al despacho, los antecedentes administrativos que, motivan esta acción constitucional.
- 7.- Acta No. 237 expedida por la PROCURADURÍA 18 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Radicación N. 217- E-2022-597376 del 6 de diciembre de 2022 declarando la conciliación fallida.

## **FRENTE A LOS HECHOS ESPECIFICOS DE LA DEMANDA**

**AL HECHO PRIMERO: Es cierto parcialmente.** Es decir es cierto que la actuación disciplinaria que dio lugar a la sanción disciplinaria, en contra del señor HUGUES OTHON OBIVELLA SAURITH, se circunscribe al incumplimiento del deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, referido a impulsar, tramitar y resolver efectivamente y de fondo el proceso de humedal No. 1944-549, (...), cuando procede a archivar injustificadamente el expediente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016; y en tal sentido la fecha de ocurrencia de la falta disciplinaria data del 10 de agosto de 2016. Pero No resulta cierto lo relativo a la narrativa respecto de la prescripción solicitada por los argumentos arriba descritos por este apoderado.

En este orden de ideas, en la decisión de segunda instancia, se argumenta con suficiencia sobre todos los hechos exceptivos e impugnaciones formuladas por la parte actora, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

**Sobre la Caducidad y prescripción de la Acción Disciplinaria se explicó:**

### **Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción**

**Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.** El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:



centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



"La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

**PARÁGRAFO.** Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique".

#### Conclusión:

En el caso materia de estudio no ha ocurrido el fenómeno de la caducidad disciplinaria por cuanto el operador disciplinario profirió el auto No. 4124.010.9.13.647-16-1618 del 27 de julio de 2021; es decir antes que transcurrieran los cinco (5) años de que trata la norma, contabilizados desde agosto 10 de 2016, incluso sin considerar los términos de suspensión de los procesos disciplinarios por razones de la emergencia sanitaria.

#### Prescripción de la acción disciplinaria

Regla general: la acción disciplinaria prescribirá en cinco años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria, es decir a partir de julio 27 de 2021.

Interrupción: con la expedición y notificación de los fallos de primera y de segunda instancia según sea el caso: Fallo de primera instancia: Abril 27 de 2022, notificado en estrado en la misma fecha.

Conclusión: En el presente caso no ha ocurrido el fenómeno de la prescripción, considerando que la investigación inicio el 27 de julio de 2021, y la notificación del fallo de primera instancia, que interrumpe los términos de la prescripción, se efectuó antes de transcurrir los cinco (5) años que ordena la ley (abril 27 de 2022).

**AL HECHO SEGUNDO: Es cierto.** Pero también lo es, que en los cargos formulados en el fallo de primera instancia se dijo sobre lo argumentado por el disciplinado para proceder al archivo de la actuación que:



Se trata de una forma anormal de finalización de un proceso con identidad jurídica propia, ya que presenta clara diferencia frente a otras formas que trae el ordenamiento jurídico, como son el desistimiento, la transacción y la conciliación, en cuanto éstas involucran la voluntad de las partes procesales en un acto jurídico con relevancia procesal, mientras que aquella resulta de un hecho ocasionado por el transcurso del tiempo, al cual se le reconocen efectos jurídicos procesales. Pero adicionalmente ha precisado que se debe tener en cuenta que los procesos administrativos se caracterizan por un fuerte impulso oficioso, es decir que la mayor parte de las actuaciones procesales que lo ponen en marcha están a cargo del juez o funcionario de conocimiento y no de las partes, ya que el ejercicio de la función pública debe ser eficaz, pronta, diligente y cumplida, lo que se concreta en el principio de celeridad, de tal modo que los términos procesales los debe observar con diligencia y su incumplimiento puede ser sancionado. Por ello, la perención solamente se genera cuando la paralización o inactividad del proceso se debe a la exclusiva negligencia o inactividad de las partes, siempre y cuando no se producto del incumplimiento de los deberes del funcionario de realizar el impulso procesal oficioso.

Por ello, en el caso que nos ocupa el reproche disciplinario ha sido el incumplimiento del deber funcional de impulsar, tramitar y resolver el proceso de humedad, que se procedió a archivar injustificadamente cuando se adujo que la parte querellante no había realizado impulso procesal alguno de la actuación policiva, desconociendo que estaba pendiente de que se llevara a cabo nuevamente la inspección ocular en el inmueble objeto de la nulidad, como fue ordenado en auto del 20 de octubre de 2015 y además le fue indicado claramente que se haría como carga, responsabilidad o deber de la Inspección de Policía de programarle esa diligencia, en la que además insistió para su práctica en los escritos que posteriormente elevó, conjuntamente con su compañera de vida, controvirtiendo además en sus escritos otras decisiones que claramente se observa que no le fueron resueltas por parte del Despacho a cargo entonces del servidor público investigado.

Considera el Despacho que ni siquiera la decisión que adoptó el 02 de agosto de 2016 tuvo la virtualidad de impulso y conclusión de la actuación, resolviendo una situación accesoria sin permitir efectivamente a las partes conocerla y atacarla, lo que resulta ser una actuación ineficaz cuando no se observa que hubiere dirigido una comunicación escrita o realizado una notificación personal a las partes o a la interesada, dando cuenta de esa decisión.

Para este Despacho es claro que no se encuentra en el expediente de la Inspección de Policía, prueba alguna de haber sido impulsado el proceso de humedad programando la realización nuevamente de la inspección ocular, como se le indicó o hizo saber que se haría al interesado o interesados en fecha 20 de octubre de 2015, y específicamente al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR mediante el oficio No.289 del 20 de octubre de 2015 y ordenado en auto de la misma fecha.

Con su actuar el servidor público definitivamente incurrió injustificadamente en los comportamientos endilgados, lo que se desvirtúa como lo pretendió en sus descargos y alegatos de conclusión al sostener que la figura de la perención es aplicable, cuando para que proceda la norma y el deber funcional del funcionario, le imponen el deber de impulsar oficiosamente la actuación, como en efecto lo habían determinado en las decisiones del procedimiento, lo que no puede desconocer inclusive, ni lo hicieron, quienes rindieron sus declaraciones.

Los comportamientos disciplinables en que incurrió el servidor público, no los justifica el hecho de que el interesado hubiere acudido a la acción de tutela como mecanismo de defensa que finalmente fue denegada por improcedente, y menos lo justifica el hecho de que para la negación de la tutela, hubiere sostenido la decisión judicial que si el accionante no estaba de acuerdo con la actuación desplegada por la Inspección de Policía, debió interponer los recursos previstos en el Código Departamental de Policía





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

y Convivencia Ciudadana, ya que si observamos el contenido de decisión adoptada en el auto del 10 de agosto de 2016 como perención, el funcionario que la expidió indicó en el punto cuarto del resuelve que contra la decisión que declaraba la perención, no procedía recurso alguno; y si se considera que dicha decisión judicial indicó que el medio de control idóneo contra esa decisión eran las acciones contencioso administrativas de nulidad y restableciendo ante la respectiva jurisdicción, es claro que conforme al artículo 2 inciso 2 del CPACA, las disposiciones de la primera parte de esa norma, no se aplican a los procedimientos de policía que por su naturaleza requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas; y además de ello, el artículo 105 ibídem consagra la siguiente excepción de ese medio de control: *“3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”*.

**AL HECHO TERCERO: No es cierto.** Nuevamente al referirnos a los acápites anteriores respecto de la decisión de primera instancia y es que de parte de los querellantes si se encuentra soportada la actuación diligente e insistente, mas no se soporta la actuación oficiosa para tales fines por parte del Inspector de policía, antes de utilizar o aplicar la figura de la perención tal como lo hizo.

**AL HECHO CUARTO: No es cierto.**

**AL HECHO QUINTO: Es cierto** lo relativo a la autonomía en las decisiones por parte del Inspector de Policía, pero también lo es que todo servidor público se encuentra sujeto no solamente a las disposiciones constitucionales y legales, sin que haya lugar a incurrir en acciones u omisiones respecto de su rol y su proceder misional frente a las quejas formuladas por los ciudadanos del común.

**AL HECHO SEXTO: Es cierto.** Pero igualmente resulta necesario advertir que el procedimiento disciplinario tanto en 1ª como en 2ª instancia, surtido se realizó conforme a los estándares constitucionales y legales y respetando el debido proceso y los principios de contradicción y defensa material y técnica.

**AL HECHO SEPTIMO: No me consta.** Sin embargo el expediente disciplinario que se remite completo, se podrá evidenciar y soportar este aspecto singular.

**AL HECHO OCTAVO No me consta.** Sin embargo el expediente disciplinario que se remite, podrá evidenciar y soportar todo lo relativo al procedimiento surtido.

**AL HECHO NOVENO: No es cierto,** se trata de comentarios subjetivos, los cuales requieren de demostración conforme a los argumentos de los fallos disciplinarios y a las pruebas arrimadas al presente proceso judicial.

**AL HECHO DECIMO: No es cierto.** Me atempero a lo consignado y a los fundamentos de los fallos de primera y segunda instancia sancionatorios.

**AL HECHO ONCE: No es cierto,** se trata de comentarios subjetivos, los cuales requieren de demostración conforme a los argumentos y pruebas previas, a la emisión de los fallos disciplinarios.

**AL HECHO DOCE: No es cierto,** se trata de comentarios subjetivos, los cuales requieren de plena demostración conforme a los argumentos descritos en los fallos disciplinarios y a las pruebas arrimadas al presente proceso.

**AL HECHO TRECE: No es cierto.** Me atempero a lo consignado en los fallos de primera y segunda instancia sancionatorios.

**AL HECHO CATORCE: No es cierto.** Me atempero a lo consignado en los fallos



sancionatorios de primera y de segunda instancia.

**AL HECHO QUINCE: No es cierto.** Me atempero a lo consignado en los fallos de primera y segunda instancia sancionatorios.

**AL HECHO DIECISEIS: No es cierto.** Me atempero a lo consignado en los fallos sancionatorios emitidos en primera y segunda instancia

**AL HECHO DIECISIETE: Es cierto.** Y a propósito, se anexa el acta respectiva prejudicial del Comité de Conciliación de la entidad, para que se observe cual fue la posición final asumida por dicho Comité el cual tiene el carácter de Institucional.

#### FUNDAMENTACION FACTICA Y JURIDICA DE LA DEFENSA

Respecto a los documentos anexos por la parte actora: Resolución No. (4124.010.21.020) del 27 de abril de 2022, por la cual se emitió el Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Verbal con Radicación 647 – 16, la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 3 de agosto de 2022, que, resolvió recurso de apelación interpuesto dentro del Proceso Disciplinario Verbal, Radicado 647 – 16, la Resolución No.4137.010.21.2818 del 4 de octubre de 2022, que ejecuta la sanción disciplinaria, proferida por la Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Dra. Claudia Patricia Marroquín Cano, la copia de los alegatos presentados en primera instancia y los alegatos aportados en el trámite de la segunda instancia, así como el acta No. 237 expedida por la PROCURADURÍA 18 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Radicación N. 217- E-2022-597376 del 6 de diciembre de 2022, declarando fallida la conciliación extrajudicial.

Con el respeto que me merece la parte convocante, considero que los soportes presentados resultan insuficientes para demostrar cualquier acción, omisión o extralimitación de las funciones de la entidad que representamos con relación a la sanción disciplinaria impuesta. A contrario sensu, anexamos con la presente contestación de manera integral todo el proceso disciplinario No. 0647 de 2016, en medio magnético, para que sea valorado y analizado por el despacho judicial en el que se soporta la rigurosidad legal surtida en todo el procedimiento disciplinario y el cual nos fue aportado por la Dirección de Control Disciplinario Interno, actualmente a cargo del Dr. Gustavo Arboleda Delgado, quien se localiza en el Piso 11 Cam Torre Alcaldía Tel: 668-77-76.

El disciplinado indica como violadas también por parte de la entidad, normas de orden constitucional y legal como lo es artículo 29 de la Constitución Política, el Artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y el Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, frente a lo cual consideramos que no resulta cierto, puesto que la acción disciplinaria en contra de los servidores públicos es precisamente una función cuya titularidad se encuentra reservada exclusivamente en el Estado, llámese Procuraduría General de la Nación, Personerías Municipales y Oficinas de Control Disciplinario Interno y otros órganos como es la jurisdicción judicial etc; y en el presente asunto lo que se observa claramente es que el Municipio de Santiago de Cali, tanto en la primera, como en la segunda instancia actuó no solamente amparado en las facultades y competencias dadas en la Constitución Política y en la ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), sino también dando aplicación estricta a los principios más elementales y básicos que deben otorgarse a todo ciudadano del común y en el caso del disciplinado según se observa que dieron aplicación al principio de legalidad, al de la presunción de inocencia y al debido proceso y sobre todo al de la **defensa material y técnica** durante toda la actuación procesal disciplinaria, la cual vino a surtir finalmente bajo el procedimiento verbal descrito en el artículo 175 y siguientes de la ley 734 de 2002.

Igualmente tampoco es cierto que se hubiese vulnerado el artículo 29 de la Constitución Política *“Debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas...”*, por cuanto a lo largo de la actuación disciplinaria, siempre y en cada una de las etapas, el disciplinado estuvo debidamente informado y notificado de todas y cada una de las diligencias disciplinarias a realizarse (**es esa la oportunidad de la defensa material y técnica**), y en los momentos cruciales y determinantes del proceso disciplinario es decir desde que el mismo momento en que fue citado a la primera audiencia de lectura dentro del auto de



citación a la audiencia dentro del procedimiento verbal, lo cual para el disciplinario correspondería a la formulación del pliego de cargos, **(todo lo cual se encuentra compilado en las actas de audiencia)**, estuvo atento en las diligencias por su calidad de abogado, brindándosele desde ese preciso momento, la oportunidad de dar las explicaciones que correspondieran en diligencia de versión libre y espontánea y de aportar en dicha audiencia, las pruebas que a bien quisiera y/o de solicitar la práctica de las mismas, realizándose cada una de ellas de manera abierta y transparente, con su presencia directa, tales como en las pruebas testimoniales es decir, todas las pruebas ordenadas y practicadas, fueron sometidas al contradictorio del sujeto procesal e implicado en cada una de las audiencias realizadas (**Lectura del auto de citación a audiencia, practica de pruebas, alegatos de conclusión y lectura del fallo disciplinario y su apelación en audiencia**), ejerciéndose de manera estricta, la defensa material y técnica. Como también se encuentra soportado que previo al fallo disciplinario de primera instancia, se presentaron los respectivos alegatos de conclusión, momento en el cual tiene el investigado, la oportunidad precisa de realizar todo el análisis pormenorizado, riguroso y de fondo respecto de los soportes probatorios aportados durante toda la actuación disciplinaria en especial de lo realizado en las audiencias, en especial, tanto de los testimonios como de los soportes documentales aportados como pruebas y finalmente en la audiencia de lectura del fallo de primera instancia se dio cumplimiento al contenido exigido en el artículo 170 del CDU, notificándose el fallo sancionatorio en estrados y en esa misma diligencia tal como lo determina la norma disciplinaria, le otorgaron al disciplinado el derecho de apelar dicha decisión, lo cual en efecto realizaron posteriormente, desatándose el recurso por la segunda instancia dentro de los estrictos términos descritos en la ley disciplinaria.

**Ahora, verificado el expediente disciplinario en su original** en la oficina en donde reposa, pudo encontrarse que cada una de las actuaciones dictadas por la Dirección de Control Disciplinario Interno igualmente fueron notificadas en debida forma.

#### **EXCEPCIONES:**

#### **1.- INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO – POR FALTA DE ACREDITACION DEL DAÑO ALEGADO.**

De las probanzas aportadas al expediente respecto del derecho en el que se considera lesionado el Sr. HUGUES OTHON OLIVELLA, para que se le restablezcan sus derechos y se le repare el daño ocasionado por las decisiones disciplinarias adoptadas por el Municipio de Santiago de Cali, a través de la Dirección de Control Disciplinario Interno y el despacho del Alcalde de Cali, francamente existe clara ausencia de pruebas que permitan establecer responsabilidades por parte de la entidad territorial respecto de los hechos que se mencionan en la demanda.

En el caso de la Dirección de Control Disciplinario Interno del Municipio de Santiago de Cali, porque según se ha revisado, el proceso disciplinario surtido por ese órgano de control, fue llevado con celeridad, eficacia y rigurosidad, siendo garantistas en cada una de las etapas frente al disciplinado, en cuanto al respeto de sus derechos y garantías constitucionales y legales, en especial en los siguientes principios administrativos entre otros: **1.- el de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria 2.- el de publicidad 3.- el del debido proceso 4.- el derecho de defensa material y técnica, de contradicción y de controversia de las pruebas 5.- El de la doble instancia 6.- del principio de non bis in ídem y de la prohibición de la reformatio in pejus etc...**

**En síntesis,** Como quiera que en el **proceso disciplinario**, surtido por la Dirección de Control Disciplinario Interno del Municipio de Cali, en contra del servidor público, se ejecutaron todas y cada una de las etapas que rigen en la ley 734 de 2002, antes de proferir los fallos de primera y segunda instancia, los cuales también cumplieron con las exigencias en cuanto a su contenido material.

En consecuencia NO puede atribuirse responsabilidad alguna al Municipio de Cali por actos omisivos, abusivos o extra limitantes; todo lo contrario, según se observa, la entidad actuó en estricto derecho acatando y dando cumplimiento a las disposiciones del Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias.

## 2.- GENERICA E INNOMINADA.

La fundamento en todos los hechos exceptivos que demostrados en el proceso le sean favorables a la parte que represento.

3.- La que usted Sra. Magistrada considere decretar de oficio al momento de dictar sentencia, conforme a sus competencias.

## LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

En escrito separado me permito llamar en garantía a la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Y A LAS COMPAÑIAS CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A, LA PREVISORA S.A Y MAPFRE SEGUROS, quienes actúan como coaseguradoras con sus respectivos anexos así: traslado de la **póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 965-87- 994000000002, con vigencia del 28 de febrero de 2023 al 15 de noviembre de 2023**

## RELACION DE PRUEBAS QUE SE HACEN VALER

### DOCUMENTALES NUESTRAS

I. Anexo copia autentica del acta del comité de conciliaciones del Municipio de Cali No. **4121.040.1.24 — 580 del 24 de noviembre de 2022**, en sede prejudicial, en la cual se determina **No** conciliar prejudicialmente bajo el entendido que la legalidad de los actos administrativos, de acuerdo a la jurisprudencia de las altas cortes, no es susceptible de conciliación, pues dicha facultad está reservada exclusivamente para el juez de lo contencioso administrativo y que para el caso concreto se tiene, que los Actos Administrativos proferidos por la Administración se fundamentaron en normas vigentes, con observancia al debido proceso, por la autoridad competente y dentro de la oportunidad establecida para ello; así mismo que para su expedición se observaron las normas que gobiernan el control disciplinario. **(5 folios útiles)**

II. Como antecedentes administrativos, se anexa el expediente disciplinario digitalizado completo, facilitado a este servidor por la Dirección de Control Disciplinario Interno.

III. Copia de la Resolución No. 2818 de octubre 4 de 2022, a través de la cual el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, ejecuta la sanción disciplinaria por el término de un mes al disciplinado, lo cual se surtió en el mes de octubre de 2022.

IV. Tabulado de pago del área de nómina del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en el que se soporta el descuento realizado en octubre de 2022.

V. Copia de la póliza expedida, a nombre de la compañía adjudicataria y líder del proceso licitatorio, la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA S.A.

VI.- Copia de los certificados de existencia y representación legal de la compañía líder, a quien se le adjudico el proceso licitatorio, e igualmente el certificado de las compañías que actúan en coaseguro, para que se sirvan responder la respectiva demanda si el señor magistrado así lo considera, o en su defecto si resulta suficiente la contestación que realice en este evento, la compañía líder “ASEGURADORA SOLIDARIA S.A”.

Finalmente, al darse la decisión de la negativa de las pretensiones de la parte





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

actora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los lineamientos dados en los Artículo 365 del CGP, comedida y respetuosamente solicito a su señoría que al resolver sobre la condena en costas y las agencias en derecho en contra del demandante y en favor de la entidad demandada, se haga bajo el criterio objetivo y valorativo, no bajo criterios subjetivos, tal y como lo expreso el H. Consejo de Estado, a través del Consejero Dr. William Hernández Gómez Rad:2013-00022-1, Sentencia del 7 de Abril de 2016, todo lo cual se evidencia y se acredita plenamente con la actividad litigiosa nuestra desplegada a favor de la entidad territorial a la que representamos como apoderado judicial, todo lo cual sin duda alguna, le genera altos costos a la entidad que represento.

De la señora magistrada, con el acostumbrado respeto

#### NOTIFICACIONES

Las notificaciones personales y las comunicaciones procesales las recibiré en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina ubicada en el Centro Administrativo Municipal C.A.M., Piso 9 Departamento de Gestión Jurídica Publica de la Torre Alcaldía, ubicada en la Avenida 2N No 10-70 de Santiago de Cali, o al correo electrónico de la entidad [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co) y en el número Email del apoderado: **hector.valencia@cali.gov.co** telefónico 3104160998

La del Señor Alcalde, Doctor JORGE IVAN OSPINA GOMEZ, en su Despacho ubicado en el Centro Administrativo Municipal C.A.M., Piso 3, Despacho del Alcalde de la Torre Alcaldía, ubicada en la Avenida 2N No 10-70 de Santiago de Cali

#### ANEXOS

Se adjunta con el presente escrito de contestación de la demanda, el documento mencionado en el acápite de pruebas. Igualmente se anexan:

- Presento poder conferido por la Directora Jurídica de la Alcaldía, con sus respectivos anexos.
- Soporte de documentos referidos en la presente contestación y el traslado a las entidades llamadas en garantía.
- Certificados de existencia y representación legal tanto de la compañía líder del proceso licitatorio, como de las que actúan en calidad de coaseguradores
- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 965-87- 994000000002, con vigencia del 28 de febrero de 2023 al 15 de noviembre de 2023, abarcando la fecha de la notificación de la presente acción a la entidad agosto 8 de 2023.

De la señora magistrada del Tribunal Administrativo, con el acostumbrado respeto.

**HECTOR MARIO VALENCIA ARBELAEZ**

Apoderado Municipio de Cali  
C.C 16.690.200 de Cali



CO - SC - CER852615



centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

T.P 71831 CSJ

Tel: 3104160998

Email: [hector.valencia@cali.gov.co](mailto:hector.valencia@cali.gov.co) / [hectorm\\_63@hotmail.com](mailto:hectorm_63@hotmail.com)

## COMUNICACIONES A:

DEMANDANTE: HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH

Email: [olivella26@hotmail.com](mailto:olivella26@hotmail.com)

a. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, representante legal o quien haga sus veces:

Email: [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co)

b. CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A, 10% y su representante legal o quien haga sus veces:

Email: [notificacioneslegales.co@chubb.com](mailto:notificacioneslegales.co@chubb.com)

c. MAPFRE SEGUROS: 20% y su Representante legal o quien haga sus veces:

Email: [njudiciales@mapfre.com.co](mailto:njudiciales@mapfre.com.co)

d) LA PREVISORA S.A: 30% y su representante legal o quien haga sus veces:

Email: [notificacionesjudiciales@previsora.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co)

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: [agencia@defensajuridica.gov.co](mailto:agencia@defensajuridica.gov.co)



CO - SC - CER852615



centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)